

“Paren de fumigar”: conflictos territoriales y construcción de una demanda en un partido de la región bonaerense (Argentina).

Erik Said Lara Corro y Yamila Vega.

Cita:

Erik Said Lara Corro y Yamila Vega (2022). *“Paren de fumigar”: conflictos territoriales y construcción de una demanda en un partido de la región bonaerense (Argentina). En Tejiendo diálogos y tramas desde el Sur-Sur: territorio, participación e interculturalidad. (México): Universidad Iberoamericana.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/erik.said/23>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pWY7/QpT>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

“Paren de fumigar”: conflictos territoriales y construcción de una demanda en un partido de la región bonaerense (Argentina)

ERIK SAID LARA CORRO* Y YAMILA VEGA**

Introducción

*Al hablarse el tema [de los agrotóxicos]
es como que se empieza a instalar.
Lo que pasa es que el poder de esta gente
es terrible, es tremendo. Te echan.
Aparte se pasan la bola, luego no te contratan,
te pasan con la camioneta muy encima.
Pero que nos hagan eso es porque algo
les estamos moviendo.*
DOCENTE (28 de marzo de 2019)

La cuestión agraria argentina nos posiciona en escenarios de profundas desigualdades estructurales y relaciones asimétricas de poder. Esta trama ha representado una encrucijada social, política y territorial, resultado de la transgresión histórica a los derechos y la vida. La emergencia de resistencias y luchas ante la economía capitalista, el modelo de agronegocios corporati-

* Doctorante en Antropología, Universidad de Buenos Aires. Becario Conicet en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH-UNSAM), Argentina. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “Educación e interculturalidad” y la Red Temática de Investigación de Educación Rural (Inide-Conacyt).

** Maestrante en Estudios Sociales Agrarios, FLACSO, y licenciada en Historia, Universidad Nacional de Luján, Argentina. Profesora de Enseñanza Media y Superior. Integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida y Ambiente Saludable.

vo y extractivo, así como los mercados de consumo, nos abren la puerta a diversas problemáticas. Por ejemplo, las políticas públicas que permiten el uso indiscriminado de productos agrotóxicos¹ y las prácticas de pulverización (más difundidas mediante la expresión “fumigaciones”) sobre viviendas, escuelas rurales, áreas de esparcimiento y márgenes de cursos de agua.

Desde una perspectiva relacional, abordamos brevemente los procesos histórico-estructurales y conflictos sociopolíticos que atraviesan el entramado territorial de un partido² de la región bonaerense. A partir de la reconstrucción de algunos casos, donde retomamos entrevistas en profundidad y artículos de prensa vernácula relevados entre 2017 y 2021, bosquejamos algunas líneas de interpretación de las acciones territorializadas de los grupos ciudadanos (familias, docentes, médicos, trabajadores y organizaciones sociales). El tema se justifica por algunas razones. Una de ellas es lo que convoca cuando se vulneran u omiten derechos;³ es decir, la acción política y el trabajo militante de las personas (en tanto individuos y en tanto grupos) generan manifestaciones y respuestas que evidencian las contradicciones de los agronegocios y el proceso público de un dominio particular (por ejemplo, los actores políticos a cargo). Otra razón responde al poder relacional hegemónico que da cuenta de esas tensiones territoriales,⁴ donde los poderes públicos y los capitales nacionales y extranjeros configuran los procesos productivos ligados a los agronegocios.

En este capítulo, argumentamos que algunos grupos ciudadanos dinamizan y complejizan el poder relacional y disputan sentidos e imaginarios de cambio social. Estas operaciones promueven la reconfiguración del Estado en lo que concierne a su régimen político y su posición frente a los agronegocios, a partir de la actuación práctica tendiente a una lucha que produzca una progresiva conciencia social e, incluso, el impulso de propues-

¹ Existen diversos términos para denominar a estos productos, por ejemplo, fitosanitarios, pesticidas, agroquímicos o agrovenenos. Estas categorías responden a una construcción social, institucional e histórica, donde el lenguaje y el sentido que les asignamos responden a posturas político-ideológicas. Las denominaciones “agrotóxicos” o “agrovenenos” son empleadas por las organizaciones de base que luchan contra los costos humano-ambientales del paradigma agroexportador basado en políticas extractivas y de explotación socio-ecológica.

² La provincia de Buenos Aires se divide territorial y político-administrativamente en municipios denominados constitucionalmente “partidos”.

³ Un análisis de las leyes y los principios vulnerados se encuentra en Ricca, Dubois & Lara Corro (2019).

⁴ Es necesario aclarar algunas cuestiones. Primero, la hegemonía no es entendida como dominación clásica; es, en su sentido gramsciano, un proceso dinámico que articula relaciones de poder ideológico y simbólico, así como formas de dominación y resistencia. En síntesis, es conflicto social y político. Segundo, el término conflicto hace alusión a una expresión de las tensiones y contradicciones del propio orden social que constituye en la propia medida que transforma (Porto-Gonçalves, 2002).

tas que posibiliten un cambio de paradigma en el modelo productivo. Así, las acciones públicas y prácticas solidarias cobran un valor de militancia en defensa del territorio, la memoria, la vida, por lo tanto, generan una “territorialidad popular”. En este sentido, se produce una interpretación de “condición de vida” distinta de la signada desde las esferas del capitalismo agroalimentario.

Estado, agronegocios y territorialidades

Nuestro interés en el estudio de la dimensión territorial resulta de las acciones y los discursos de los grupos ciudadanos que han colocado al territorio en escena (Porto-Gonçalves, 2002). Asimismo, es interesante documentar los ámbitos de gestión de los conflictos, las crisis ocasionadas por los procesos desarrollistas basados en políticas económicas neoliberales orquestadas y puestas en común entre el Estado y otros sectores de la sociedad. De ahí la necesidad de reconocer el lugar del “Estado capitalista” —en el sentido gramsciano— en esta concomitancia. Desde el campo de la antropología política, se ha señalado que el “Estado” no necesariamente tiene fijeza institucional. Su materialidad reside “en el discurrir de los procesos y relaciones de poder” (Trouillot, 2001, p. 4) que se despliegan cotidianamente en múltiples sitios.

En Michael Trouillot (2001) y Akhil Gupta (2015) encontramos que el Estado aparece no como un conjunto de instituciones predeterminadas, sino que constituye un cúmulo de prácticas, discursos, representaciones y relaciones donde el Estado (nacional, provincial y sus municipios) llega a ser imaginado o construido; por ejemplo, los modos de representación simbólica del Estado en la cultura pública.⁵ Esto nos ayuda a comprender cómo la realidad de las entidades translocales llega a ser representada por las personas y los funcionarios estatales (Gupta, 2015). En la sociedad capitalista, la relación entre Estado y sociedad es un tema relevante. Dicha correlación —con sus variantes— aparece tanto en distintos contextos estatales como en el marco de un mismo campo político. Así, la sociedad política y los sectores

⁵ En su trabajo de campo en la pequeña aldea de Alipur, al norte de la India, Akhil Gupta (2015) estudió las condiciones de posibilidad de hablar del Estado. Para Gupta, estudiar el “Estado” etnográficamente implica “tanto el análisis de las prácticas cotidianas de las burocracias locales como la construcción discursiva del estado en la cultura pública” (p. 73). En su trabajo, encontró que el elemento movilizador de la aparente omnipresencia estatal es justamente la existencia y extensión de la corrupción.

de la sociedad civil abarcan una gran variedad de relaciones, articulaciones y correlaciones de fuerza que atraviesan todos los planos al mismo tiempo. Para los fines de nuestro argumento, registrar la acción política y el trabajo militante es fructífero cuando se examinan las estrategias de lucha política, pues el Estado es una formación que “condensa” las contradicciones; por lo tanto, nos acercamos al campo cultural e ideológico (Hall en Gupta, 2015) que configura las políticas. Esto nos alerta que en varios aspectos coexisten un poder relacional, en tanto configuración cotidiana e histórica.

Al analizar el caso argentino, en el contexto histórico de consolidación del neoliberalismo, se gestaron diversos procesos económicos, sociales, políticos y estatales. A raíz de la llamada Revolución Verde —que se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo xx—, la manipulación política y cultural de los aparatos existentes tendieron sus redes públicas y privadas, por ejemplo, en trayectos de la sociedad y el sector agropecuario, adoptando grupos semánticos como “desarrollo”, “buenas prácticas”, “calidad” y “productividad a corto plazo”. Éstos fueron promovidos por los organismos internacionales, las corporaciones de los agronegocios y la clase política; así, paralelamente y con grandes recursos estructurales, establecieron discursos y prácticas sociales. No obstante, se gestó una compleja territorialización de conflictos, contradicciones y luchas ante estos mecanismos.

La adopción del modelo agroindustrial que se expandió en ese contexto tuvo por objeto maximizar la escala de explotación agropecuaria. En el contexto actual, por ejemplo, la campaña agrícola 2020/2021 estimó 33.15 millones de hectáreas con cultivos (trigo, cebada, girasol, maíz, soja y sorgo), a su vez, el volumen de agrotóxicos lograría un aumento consecutivo.⁶ Como resultado, el uso de millones de litros de agrotóxicos ha incidido sobre las poblaciones por la exposición sistemática a productos que afectan gravemente la salud, el ambiente y la vida; también ha generado una elevada concentración y centralización de la tierra, así como la expulsión de pequeños productores y familias (Villulla, 2015).

Los agronegocios son unidades productivas empresariales heterogéneas que se caracterizan por desarrollar transformaciones técnicas, productivas, tecnológicas, sociales, ambientales y territoriales. Como un modelo o una

⁶ Aunque esta campaña mostraría una retracción de -0.2% en 2021, se anticipó una mayor oferta de lotes para la siembra de soja. Además, la campaña 2019/2020 alcanzó una superficie récord de 36.6 millones de hectáreas, “la segunda mayor cosecha histórica” en el país. Datos proporcionados por el Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) sobre la base del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Fuente: Informe de coyuntura agrícola (junio de 2020).

lógica de producción, con sus variantes nacionales y locales, se caracteriza por impulsar “nuevas relaciones de poder, reestructurando a los sectores dominantes” (Gras & Hernández, 2013, p. 25). Este modelo a su vez constituye una práctica discursiva y de legitimidad (Bageneta, 2015). No sólo hay una apropiación de un bien (biodiversidad, agua, tierras, minerales) en manos de un empresariado, sino también de la palabra y el conocimiento, desvalorizando los saberes acumulados históricamente, con el aval de la ciencia y la técnica (Maldonado, 2016). Históricamente, sus pilares se articularon en una dinámica particular de territorialización social, económica y política que terminó reconfigurando de raíz el mundo agrario argentino:

[...] con el popularmente llamado “modelo sojero” se expandieron nuevas formas de organización del trabajo y de apropiación de los recursos naturales. Esto constituyó una inflexión a nivel de los procesos productivos [...] y también se innovaron radicalmente los procesos de gestión (nuevas tecnologías de la comunicación e información, profesionalización de la administración, organización de la empresa en red, integración con la industria, modos de almacenamiento de los granos, lógicas de comercialización de los insumos). En el plano sociológico, se movilizaron nuevas identidades [...] Se consolidaba de este modo un sistema altamente dependiente de los mercados externos [...] y apalancado por el capital financiero (Gras & Hernández, 2013, p. 18).

Estas transformaciones en el sistema productivo sitúan a las poblaciones en un ambiente hostil y violento, condición que demuestra las relaciones claramente asimétricas de dominación en la complejidad del capitalismo agrario, inoculando estos “territorios de acumulación extractivista” (Borde & Torres-Tovar, 2017). El proceso, además, se entrelaza con otros territorios que padecen similares consecuencias derivadas de la expansión de la frontera agropecuaria, por lo tanto, son marginalizados por las fumigaciones sistemáticas con agrotóxicos. La evidencia empírica nos alerta que alrededor de 700 mil niños están expuestos a dichas prácticas sin controles en los campos cercanos a las escuelas.⁷

⁷ Según una nota elaborada por Tuchin, Florencia (23 de enero de 2020). Pesticidas: el gran problema de las escuelas fumigadas. *El País*.

Sin duda, los conflictos y las tensiones territoriales son resultado de los antagonismos entre diferentes sentidos que los grupos humanos asignan al territorio. En este punto, consideramos que son provocadores los estudios sobre el “territorio”, en tanto categoría analítica y de la práctica, producidos desde la geografía crítica y la ecología política como campo de confluencia (véase Escobar, 2014; Haesbaert, 2013; Porto-Gonçalves, 2002). El territorio es un espacio geográfico, por tanto, un *lugar* apropiado material y simbólicamente, e impregnado de historia. Ese proceso de apropiación (territorialización) conlleva diferentes sentidos (territorialidades) que se inscriben en procesos dinámicos y cambiantes, materializando en cada momento un determinado orden de configuración territorial (Haesbaert, 2013; Porto-Gonçalves, 2002, 2013). En suma, siguiendo a estos autores, este elemento procesual implica una triada: territorio-territorialidad-territorialización, que nos lleva a la comprensión del territorio como producción social, política, histórica, y a su vez describe cómo diferentes grupos humanos se apropian y asignan sentidos al espacio.

Desde estos entrelazamientos, podemos comprender cómo el territorio se concatena con el poder relacional: sea de dominación, cuando es más explícito, o de apropiación, cuando es más implícito o simbólico (Haesbaert, 2013; Porto-Gonçalves, 2002). Estas relaciones conceptuales nos permitan comprender los resortes sociales, políticos, culturales y económicos de la llamada “territorialidad”. El tortuoso camino que va de la visualización de los conflictos y las problemáticas territoriales hasta su inscripción en la agenda ha generado una “territorialidad popular” que da sentido y significado a la actividad, valorizando las demandas y las prácticas culturales de quienes habitan los territorios. Por ejemplo, en un Centro Educativo para la Producción Total (CEPT)⁸ de esa región, algunos docentes señalaron que hay personas que se vinculan a los agronegocios y que fumigan. Una profesora dijo que “eso no está bien, pero no les queda de otra” (docente, 5 de diciembre de 2018). Estas prácticas y significaciones que propagan las clases dominantes generan un campo de concepciones políticas heterogéneas del

⁸ Los CEPT son escuelas agrarias oficiales de nivel medio ubicadas en espacios rurales de la provincia de Buenos Aires. Cuentan con una organización enmarcada en la pedagogía de la alternancia y cogestionadas entre la población y el Estado. La alternancia implica que el proceso escolar se estructure de manera “alternada”; es decir, los estudiantes tienen periodos de permanencia entre la escuela y sus hogares. Esto permite adaptar dicha estructura a los tiempos de producción en las unidades domésticas y permite mayor posibilidad de asistencia a la escuela, pues muchas veces en las zonas rurales el traslado desde y hacia el establecimiento es difícil por las distancias y condiciones de los caminos.

conflicto social. Además, siguiendo a Rogério Haesbaert (2014), configuran gradualmente la construcción de territorialidad a través de redes, conexiones o flujos, lógica típica de las grandes empresas. De ahí que este proceso —con frecuencia conflictivo— configure la arena pública actual, generando elementos “voluntarios”, “de involucramiento”, “organizativos” y “solidarios” en las luchas sociopolíticas.

Nos encontramos ante una profunda reconfiguración geográfica regional con una fase de acumulación de capital y alianzas entre diversas instancias del Estado y la sociedad (funcionarios públicos, sindicalistas, asociaciones privadas, empresariado y los medios de comunicación), que traza a los gobiernos locales, provinciales y nacional como un *lobby* ante los intereses del capital financiero. Quienes se benefician principalmente son los explotadores de gran escala, las firmas transnacionales de agroinsumos y las grandes empresas exportadoras de materias primas (también denominadas *commodities*) (Gras & Hernández, 2013). Es innegable que las redes de alianzas y pactos, entre lo que denominaremos heurísticamente “esferas Estado-empresariales”, se desarrollaron a partir de dicha reconfiguración y la articulación de estrategias y tácticas de poder: políticas que privilegian a las burguesías y les permiten el acceso a las estructuras del Estado —el gobierno de los empresarios, también señalado como “CEOCRACIA”⁹—, o la articulación con organismos internacionales, bufetes de abogados, periodistas, académicas, instituciones científicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones de diverso tipo se vinculan con el Estado en la construcción de saberes y formulación de políticas; pero también del histórico acaparamiento de las tierras por parte de quienes tuvieron el capital para adquirir un crédito y fueron avanzando sobre los pequeños y medianos productores familiares; así como las alianzas “por arriba” entre empresas concentradas de insumos y los “megajugadores” de los agronegocios (Gras & Hernández, 2013).

El consenso de dichas esferas ha sido fabricado históricamente por las políticas económicas y sociales que emplean un conjunto de disposiciones políticas e ideológicas que incluyen bloques de sectores estatales y de la “economía de los agronegocios”. En este sentido, Guilherme Delgado (2013)

⁹ Por ejemplo, Rosso señala que el gobierno macrista tuvo la conformación de una “CEOCRACIA”, es decir, “un gabinete integrado casi en su totalidad por gerentes de multinacionales, bancos y representantes de las patronales del campo” (párr. 2). Véase: Rosso, Fernando (14 de enero de 2016). Gobierno de Macri: CEOcracia y decretismo. *La Izquierda Diario*.

muestra que dicha economía representa una hegemonía desde arriba. A pesar de los intereses más generales del país, genera acaparamiento de tierras, cadenas agroindustriales estrechamente vinculadas a sectores extranjeros y burocracias gubernamentales, en tanto goza de apoyo estatal. La economía de los agronegocios va más allá de la “estrategia económica” para construir ideológicamente una hegemonía territorial: gran propiedad de la tierra, cadenas agroindustriales estrechamente vinculadas al sector externo y burocracias estatales (vinculadas al dinero y la tierra), para realizar un proyecto peculiar de acumulación de capital.

Un ejemplo claro lo constituye el terreno educativo. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca creó, mediante la Resolución 349/2016, el “Programa Escuelagro”¹⁰ para escuelas secundarias agrarias y rurales, que vincula la educación rural y la producción agroindustrial. Este programa es impulsado, entre otros, por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid),¹¹ promotores del modelo de agronegocios que actúa junto con las grandes empresas que venden semillas transgénicas y agrotóxicos. Esta catalogada “política de educación transgénica”¹² levantó un amplio rechazo por parte de diversas organizaciones sociales, como la Red Federal de Docentes por la Vida,¹³ que advierten acerca de las muchas trampas de esta propuesta.

Las implicaciones de esta política desbordan lo puramente instrumental para plantear un problema sociopolítico: la construcción de un “horizonte común de sentidos” que posibilite la continuidad de los agronegocios en tanto construye legitimidad social (Córdoba, 2019). No nos cabe duda de que Escuelagro funge como agente difusor de un modo utilitario e instrumental de pensar la escuela y la educación. Este discurso bienhechor del corporativismo Estado-empresarial forma parte de las fuerzas y dinámicas que regulan y conducen la racionalidad del sistema productivo hegemónico en la educación. En suma, este tipo de programas y acciones políticas son un intento de imposición simbólica; buscan moldear las estructuras y los

¹⁰ Más información al respecto puede encontrarse en Escuelagro (11 de diciembre de 2020). Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/agricultura/escuelagro>

¹¹ Aapresid es una organización civil fundada en 1989 por productores de la zona central Argentina, con el apoyo de la empresa Monsanto. Para un análisis más exhaustivo de esta asociación, véase Grass y Hernández (2016).

¹² Véase: Aranda, Darío (12 de enero de 2019). Agroescuela: el discurso transgénico en la educación. *Revista MU*.

¹³ En el apartado siguiente, nos detendremos en los orígenes de esta Red.

patrones económicos, sociales y políticos preexistentes a las necesidades del capitalismo global.

Por otra parte, la Red Federal de Docentes por la Vida ha denunciado la convocatoria al concurso “Futuros Líderes BPA”, impulsado por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), destinado a estudiantes de los últimos tres años de escuelas secundarias técnicas agrarias o técnicas. Bajo el lema “Hacer las cosas bien y poder mostrarlo”, el concurso propone la realización de un proyecto donde se implementen las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el uso de agrotóxicos.¹⁴ Durante la administración de María Eugenia Vidal en Buenos Aires (2015-2019), el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís (quien fuera además ex gerente de Monsanto), habilitó la Resolución 246 el 17 de octubre de 2018, donde se establecieron pautas de aplicación de agrotóxicos según los criterios de las llamadas “BPA”.

Sin embargo, la pronta reacción de las organizaciones sociales de la provincia demostraron que, de aplicarse, el decreto sería regresivo en contravención a la Ley General del Ambiente 25.675 y, además, promovía la posibilidad de fumigar con agrotóxicos en los espacios denominados “zonas de amortiguamiento”, que se encuentran en cercanías de escuelas, viviendas y núcleos urbanos. Varias organizaciones se pronunciaron en un documento de posición y plan de lucha de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires ante dicha resolución, también denominada “Resolución del veneno”.¹⁵ En este sentido, el rechazo fue tan importante que forzó su suspensión por un año.¹⁶

Lo anterior nos muestra, por un lado, que los procesos de territorialización y los territorios que surgen de ellos se construyen dentro de una reacción de confrontación, resistencia y defensa en relación con alguna “amenaza” (Haesbaert, 2021); en nuestro caso, por ejemplo, las prácticas de pulverización y los sentimientos de inseguridad que generan en las poblaciones. Por otro, es evidente la tensión constitutiva (y creativa) entre lo simbólico y lo material; la dimensión política vinculada a las relaciones sociales, económicas y culturales que se establecen, así como las formas en que los grupos humanos generan territorialidades y los significados que

¹⁴ Véase: Guerrero, Mariángeles (26 de febrero de 2021). Con anuencia del Estado, Casafe promueve los agrotóxicos en las escuelas. *Agencia Tierra Viva*.

¹⁵ Véase: Documento de los Pueblos Fumigados de Bs. As (8 de julio de 2019). *Naturaleza de Derechos*. Recuperado de <http://www.naturalezadederechos.org/246.htm>

¹⁶ Véase: La “Resolución del Veneno” suspendida, ¿Soplan nuevos vientos? (19 de febrero de 2019). *Huerquen, Comunicación en colectivo*.

atribuyen al lugar (Haesbaert, 2013). La tensión de territorialidades desencadenada por la creciente hegemonía política de los agronegocios se expresa con toda fuerza. La misma tensión en la territorialidad se puede observar en la acción política, solidaria, activista y popular por parte de las poblaciones y organizaciones sociales: las demandas públicas, las convocatorias a marchas, los plantones y las demostraciones diversas. Como señala Porto-Gonçalves (2002), es significativo de la tensión de territorialidades que caracteriza a estos días, especialmente lo que indica esa compleja tensión y nos da una dimensión de los conflictos.

Tensión de territorialidades

El partido de San Andrés de Giles está ubicado a 103 kilómetros de la región metropolitana de Buenos Aires (RMBA).¹⁷ Limita con los partidos de Exaltación de la Cruz al noroeste, Mercedes al sur, Luján al sudeste, Suipacha al sudoeste, Carmen de Areco al oeste y San Antonio de Areco al noroeste. El actual intendente municipal es Carlos Puglelli del Frente de Todos.¹⁸ Esta región conforma la zona agrícola-ganadera del norte bonaerense y sur santafesino. Tiene alrededor de 24 mil habitantes (según datos del último censo nacional de población de 2010). El sector agropecuario es el motor de la economía y productividad local, así como de las “representaciones de ruralidad” que se construyen para los nuevos usos residenciales (González Maraschio, 2011).

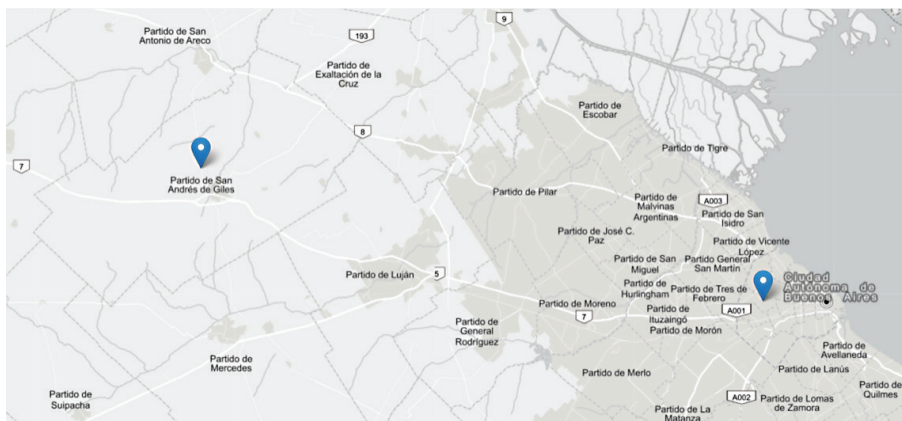
La región está atravesada por dos procesos estructurales: el avance de los agronegocios y la expansión de la región metropolitana.¹⁹ Además, comenzó a profundizar una concepción de la agricultura en la que prevalece una racionalidad mercantil que ha generado, por ejemplo, la disminución progresiva de la agricultura familiar, reforzando relaciones asimétricas de poder (Hendel, 2009). Como sugiere Haesbaert (2013), el espacio geográfico también es fundamental para comprender estas relaciones sociales.

¹⁷ Esta área geográfica abarca la totalidad de los asentamientos urbanos, contando con 44 unidades administrativas (partidos-municipios). En la RMBA se ubica el polo industrial, económico y de logística más importante del país.

¹⁸ Coalición política gobernante en Argentina encabezada por el actual presidente Alberto Fernández, donde convergen distintos sectores ligados al peronismo, como el Partido Justicialista, el kirchnerismo y el Frente Renovador. Obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de 2019.

¹⁹ Transformaciones estructurales que fueron documentadas ampliamente por Fernanda González Maraschio (2011) y Verónica Hendel (2009).

Imagen 8.1 Localización del partido de San Andrés de Giles*



Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

La cercanía del partido con la RMBA representa la coexistencia de complejos procesos urbano-regionales. Siguiendo a González Maraschio (2011), los usos residenciales “alternativos” estimularon el fraccionamiento de las tierras y promovieron la instalación de producciones intensivas; también elevaron el precio de la tierra y favorecieron la empleabilidad precaria de la población local. Así, esta territorialidad, como conjunto de prácticas y representaciones, ha adquirido una doble connotación relacional. Por un lado, lo simbólico promueve su diferencia con el espacio urbano; por otro, lo material fomenta la relativa cercanía con el núcleo urbano y la creciente dotación de servicios (González Maraschio, 2011).

En consecuencia, el control de los “recursos” y los vínculos de dominio, consumo y valor en esta área han generado formas de resistencias, en tanto “acciones de protesta” (Giarracca, 2002) por parte de diversos grupos ciudadanos. James Scott (2000) propone enfocar no las formas aparentes de la hegemonía, sino las prácticas cotidianas; no privilegiar los discursos oficiales, sino los códigos ocultos para descifrar las relaciones de poder. En un sentido relacional, el poder es considerado una correlación de fuerzas —aunque (siempre) desiguales— y de resistencias que permiten reconstruir el territorio (Haesbaert, 2013; Scott, 2000). Esta comprensión requiere la acción

* El partido de San Andrés de Giles es un área lindera a los núcleos urbanos de la región metropolitana de Buenos Aires.

política de los grupos subalternizados mediante estrategias de resistencia a diversas formas de dominación. No es menor que los grupos hegemónicos utilizan la estigmatización; por ejemplo, las empresas vinculadas al agro lanzan campañas mediáticas para desprestigiar a las organizaciones sociales y mostrar las “bondades” del modelo. De ahí que las estrategias empleadas por tales organizaciones se basan en acciones y prácticas solidarias que se vierten como encuentros, protestas, peticiones y formulación de proyectos alternativos.

Considerando a numerosos estudios que evidencian las consecuencias de la utilización de agrotóxicos sobre el ambiente y la salud humana,²⁰ durante 2017 se llevó a cabo la primera audiencia pública en San Andrés de Giles. La finalidad: debatir el modelo de producción vigente. Ese mismo año, durante el 8vo Encuentro de Pueblos Fumigados, nació la Red Federal de Docentes por la Vida,²¹ que nuclea a docentes, vecinos y otros actores de distintas provincias de Argentina, teniendo como bandera de lucha la promoción de la agroecología —en tanto metodología y enfoque territorial— para la defensa de la vida. Fundamentalmente porque:

[...] el extractivismo en sus distintas formas vulnera nuestros derechos a la educación y a un ambiente sano. Por eso mapeamos nuestras problemáticas específicas, repasamos las herramientas legales que desplegamos como el “protocolo de actuación y denuncia en casos de fumigación con agrotóxicos en las adyacencias de escuelas rurales”; y compartimos recursos didácticos y de la ciencia digna para nuestra tarea cotidiana. Reforzamos nuestra palabra y las estrategias de defensa de las escuelas rurales que son centrales para potenciar y facilitar el arraigo de la comunidad rural y su identidad.²²

Primeros movimientos: territorialización de una demanda

Ante el suceso de una fumigación en las adyacencias de la Escuela Primaria Rural No. 21 en San Andrés de Giles, un grupo de vecinas y vecinos se organizaron para construir un proyecto de ordenanza que defendiera las viviendas y escuelas: prohibir y poner límites a esa práctica consecuencia del

²⁰ Véase: Rossi, Eduardo (14 de mayo de 2015). Antología toxicológica del glifosato. *Biodiversidad*.

²¹ Para más información acerca de la organización: www.docentesporlavid.org

²² Véase: Comunicado de la Red Federal de Docentes por la Vida (30 de julio de 2019). Además: Aranda, Darío (12 de agosto de 2019). Un plenario nacional contra el agronegocio. *Página 12*.

modelo productivo hegemónico. “Se sabía que hasta ese momento no había nada sobre el tema” y, para construir el proyecto de ordenanza, se realizó una audiencia pública. Este proceso es considerado un momento histórico porque fue la primera audiencia pública en el partido, que se llevó a cabo el 7 de abril de 2017.

El proyecto se legitimó mediante la recolección de firmas en la plaza del pueblo por parte del colectivo Ambiente Saludable (AS), organización de base integrada por vecinas y vecinos: “entre gente conocida” y con ciertas afinidades políticas, quienes desarrollaron diversas actividades pedagógicas (charlas, cine-debate, conferencias con especialistas) para “informar y concientizar” acerca de las problemáticas sociales y ambientales del partido. A raíz de que AS presentó un proyecto de ordenanza, otro grupo representado por la Sociedad Rural (SR) y otros actores vinculados al espacio rural (médicos, veterinarios, agrónomos, docentes, periodistas, académicos), impulsaron la creación del Colegio de Agrónomos de San Andrés de Giles. A partir de ese “hecho político” que fue la Audiencia Pública, reforzaron alianzas provenientes de distintas industrias que impulsan las “BPA” con el apoyo de organismos municipales y una estrategia discursiva que plantea una falsa solución: “no es que hagan mal los agrotóxicos, lo que sucede es que se están aplicando mal”.

El proceso de construcción y debate en relación con la ordenanza²³ fue vivido como una “derrota”, porque luego de un tiempo de reclamos y propuestas sólo concedieron cien metros libres de fumigación. No obstante, algunos integrantes de AS consideraron que dicho proyecto instaló un problema en la agenda pública-regional: “fue estratégica la presentación de una ordenanza de ese tipo, porque abrió la discusión sobre el tema... pero las correlaciones de fuerza desde arriba impidieron su puesta en marcha” (militante AS, 27 de julio de 2019). Luego de un tiempo, consideraron la posibilidad de construir y poner en el debate público una ordenanza más progresiva. La Audiencia Pública, como hecho político y popular, “unió muchas voces y muchas personas que veníamos recorriendo desde distintos lugares” (docente AS, 28 de marzo de 2019); pero también fue un proceso que comenzó a visibilizar las tensiones sociopolíticas en el terreno.

²³ Véase: Ordenanza 1296/08 “Uso de agroquímicos”. *H. Concejo Deliberante de San Andrés de Giles*. Recuperada de <https://hcdsanandresdegiles.blogspot.com/2010/03/129608-uso-de-agroquimicos.html>

Años después, en un nuevo contexto político nacional,²⁴ los concejales del Frente de Todos retomaron el “viejo proyecto” de ordenanza presentado por AS con el objeto de promover la agroecología. Este nuevo proyecto de ordenanza se construyó en espacios abiertos a través de discusiones e intercambios entre diversos actores y organizaciones de base: productores locales, AS, el Movimiento Evita, el Colegio de Agrónomos y un Centro Educativo para la Producción Total (CEPT). Estos primeros movimientos, aunque no nuevos, tensionan y desenmascaran a los grupos dominantes que se originaron en los márgenes de la sociedad y el Estado.

“Paren de fumigar” se convirtió no sólo en un discurso social, político y ambiental, sino en la construcción sociopolítica de una demanda que nos muestra cómo “la sociedad está territorializada y el territorio es su condición de existencia material” (Porto-Gonçalves, 2002, p. 13). Dicha demanda, como productora de relaciones sociales y territorializaciones, otorga un efecto de identificación en las organizaciones sociales en el paisaje político-cultural (Trouillot, 2001) y nos permite reconocer las relaciones de poder que están detrás de ese proceso, que no obedecen a una mera subordinación jerárquica, sino a una producción de territorialidad respecto a las relaciones sociales, económicas y culturales vinculada a las esferas público-privado-civil.

“Si está bien aplicado, no causa daño”

La defensa de los denominados “fitosanitarios” o “agroquímicos” excede la simple descripción de productos tóxicos empleados en la agricultura. Las condiciones sociopolíticas de producción discursiva e ideológica son la base para interpretar las disputas de sentidos en torno a productos que implican riesgos para la salud en general. Las denominaciones que reciben estos compuestos responden a ciertas posturas ideológicas e intencionalidades. Las esferas Estado-empresariales han utilizado denominaciones enmascaradas que generen sentimientos de seguridad en las personas: “No pasa por la distancia sino por la forma de aplicación y la dosis de los fitosanitarios, pesa más el tema del viento y la temperatura. Bien aplicado como cualquier

²⁴ Por ejemplo, desde 2020, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires impulsa capacitaciones y proyectos con relación a las producciones agroecológicas. También ha creado una Red de Facilitadores en Agroecología. Para más detalles, véase: El MDA lanzó un programa de promoción de la agroecología (19 de junio de 2020). *Noticias del Ministerio de Desarrollo Agrario*.

otro producto, con la dosis y aplicación adecuada, los fitosanitarios no causan ningún tipo de daño” (Luis Etchevehere, 11 de julio de 2018).²⁵

El “bien aplicado, no causa daño” del ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere —quien fuera presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 2012 y 2017— también estuvo acompañado por otra afirmación: aquello que las organizaciones socioambientales denominan “veneno” o “agrotóxicos” no causa daño, “sin importar a cuántos metros de la población se fumigue”. Estas declaraciones representan una postura pragmática que apela a la responsabilidad individual y capta la moralidad del colonialismo occidental, en la medida que se habla de “manejar” o “administrar” el ambiente (Pálsson, 2001).

Las aseveraciones de estos actores no cuestionan de ninguna manera estas propuestas, por el contrario, contribuyen a la reafirmación de la hegemonía cultural. Asumen, además, que los “productos fitosanitarios” son seguros para la salud y el ambiente, siempre que se gestionen y manipulen de manera “responsable”. Pero, ¿qué hay detrás de estas construcciones discursivas? Gramsci explicaría que la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos maneras: como dominio y como dirección intelectual y moral.²⁶ Este tipo de discursos y estrategias intervienen lo público (dominio) para fundamentalmente construir legitimidad e identificación con la población y los productores, sosteniendo muchas veces que generan parámetros de sustentabilidad y protección ambiental (dirección). Tales construcciones discursivas sintetizan el aparato ideológico-cultural que sostiene el *statu quo* político y la identificación de diversos sectores públicos, redes de corporaciones multinacionales, fundaciones, asociaciones y grupos sociales movilizados en favor de las BPA.

Las BPA son el resultado de campañas altamente proactivas: no hay límites éticos en las declaraciones y los comunicados. La propuesta de las BPA no se explica sin el respaldo de funcionarios públicos que difunden sus argumentos a favor, y de los diversos grupos hegemónicos que la consideran “innovadora”, “transformadora” y “cuidadosa” respecto del ambiente y la salud, a pesar de las pruebas que se acumulan. En los últimos años, actores y organizaciones hegemónicas han exaltado la necesidad del aumento de la productividad, del uso de biotecnologías y la eficiencia como valores del

²⁵ Véase: Los ministros de Monsanto (13 de julio de 2018). *Revista Cítrica*, párr. 10.

²⁶ En *Cuadernos*, v, p. 387; *Il Risorgimento*.

modelo. También elaboran propuestas y desarrollan actividades en distintos frentes que exaltan el carácter “revolucionario” y “transformador” de las BPA en la configuración de un “nuevo paradigma productivo” filantrópico y corporativo que pretende “alimentar a un mundo en crecimiento”.²⁷ De ahí que sus “voceros” acostumbran a hablar en nombre de una sociedad civil organizada, como si fuera un monolito.

La defensa de los “fitosanitarios” o “agroquímicos” es general y sin excepciones en esas esferas público-privadas. No se repara en que las prácticas con esos productos traen aparejadas una serie de consecuencias y costes para la vida humana y no-humana. Como desarrollamos en otro apartado, las BPA son el resultado de una campaña donde las corporaciones construyeron una plataforma, la “Red BPA”, que “busca influir en educación y en políticas públicas: un discurso elaborado por las empresas que es asumido por el Estado como política pública, de la mano de empleados devenidos funcionarios”.²⁸ La polémica de los “empleados devenidos funcionarios” visibiliza los entramados de redes de protección y moviliza los distintos intereses que representan al campo Estado-empresarial: la denuncia pública sugiere que los empleados privados que formaron parte de la agroindustria ahora encuentran un espacio como funcionarios públicos.

La ventana de oportunidad que aprovechó el conservadurismo para presentarse como legítima representante de la sociedad civil, puede verse desde la Casafe. Dicho sector defiende que las BPA están “orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles”.²⁹ Estas plataformas tropezaron con el rechazo popular en los territorios. Actualmente, las organizaciones de base continúan explicitando los daños en la salud que produce la convivencia con venenos y denunciando el rol del Estado con relación a las empresas ligadas a los agronegocios. Dicha manifestación sociopolítica encontró en discursos, como el de Etchevehere, un formidable detonante: la intensa labor relacional de muchas mujeres que lideran procesos de resistencia contra

²⁷ Más detalles en Casafe (2021). *Buenas Prácticas Agrícolas y uso responsable de fitosanitarios*. Recuperado de www.casafe.org/buenas-practicas-agricolas

²⁸ Véase: En Buenos Aires “vía libre” se dice “buenas prácticas agrícolas” (18 de diciembre de 2018). *Huerquen, Comunicación en colectivo*.

²⁹ Véase: Casafe (2021). *Buenas Prácticas Agrícolas y uso responsable de fitosanitarios*. Recuperado de www.casafe.org/buenas-practicas-agricolas

la territorialización de los agronegocios. Frente a estas políticas, la única salida fue la lucha.

Muestra de ello es el caso de Ana Zabaloy, maestra rural de San Antonio de Areco, que falleció de cáncer en junio de 2019. Ella fue tejiendo “una red de docentes, familias, o personas que, desde el ámbito de la ley, la ciencia, la salud o el arte, se comprometieran para visibilizar y buscar soluciones ante esta grave problemática” (Ricca, Dubois & Lara Corro, 2019, p. 8). También cuestionó a la ex gobernadora María Eugenia Vidal por permitir la fumigación de escuelas rurales. Zabaloy sufrió y padeció el alcance de las fumigaciones con 2,4-D en pleno horario escolar, a metros de la escuela rural donde daba clases y era directora. Luchó incansablemente y su legado hoy continúa:

Muchos de los docentes afectados de la provincia de Buenos Aires nos hemos reunido en lo que denominamos Red de Docentes por la Vida para apoyarnos solidariamente, hacernos escuchar y para que cada una de nosotras no esté sola a pesar de todo. La mayoría de las veces estamos solas en nuestros pueblos, enfrentando la indiferencia, la falta de compromiso de los que deberían cuidarnos. Complicidades del poder político y hasta amenazas.³⁰

El costo personal y emocional es altísimo para las personas que viven cotidianamente en estado de lucha y atravesadas directa o indirectamente por muchas formas de violencias. Por ejemplo, varias docentes que forman parte de la Red y de AS han denunciado que muchos estudiantes presentan problemas respiratorios, alergias, erupciones en la piel, sufren dolores de cabeza permanentes y fuertes intoxicaciones, ya sea por el contacto directo con los agrotóxicos, cuando ayudan a sus padres en las actividades agrícolas, o por la llegada de los venenos a través de la deriva.³¹

³⁰ Fragmento de la carta. Véase: Ana Zabaloy (28 de mayo de 2017). Paren de enfermarnos, paren de matarnos. *Revista Cítrica*. Para una revisión del caso, véase: Murió Ana Zabaloy, una docente fumigada de San Antonio de Areco (10 de junio de 2019). *ANRed-Agencia de Noticias*.

³¹ La deriva se refiere al desplazamiento de la aspersión (de un plaguicida) fuera del blanco, determinado por transporte de masas de aire o por falta de adherencia. Como señala Tomasoni, cuando se habla de deriva, en general, se le asocia con el efecto que origina habitualmente el viento, pero en realidad hay otros tipos de derivas menos visibles, originados por la humedad relativa y la temperatura ambiente. Al respecto, recomendamos consultar: Tomasoni, Marcos. (2013). No hay fumigación controlable. Generación de derivas de plaguicidas. *Red Universitaria de Ambiente y Salud-Médicos de Pueblos Fumigados*, y Lanson, Daniel, Schein, Leila, y Miglioranza, Mauricio (2009). Aportes para la comprensión de la incidencia de los factores climáticos y tecnológicos sobre la deriva de agroquímicos aplicados a cultivos de soja y sus respectivos efectos sobre la población potencialmente expuesta. *Ediciones INTA*.

Dicha situación conforma escenarios de exposición sistemática a estos compuestos tóxicos en todo el país. Por ejemplo, Vittori et al. (2017) midieron la presencia de agrotóxicos en el aire perimetral de escuelas rurales ubicadas en zonas de intensa producción agrícola y de aplicación de agrotóxicos en la Provincia de Entre Ríos. En los establecimientos, tomaron muestras y hubo presencia de glifosato; en otras, detectaron insecticidas como endosulfán, cipermetrina y clorpirifos.

Imagen 8.2 Ana Zabaloy, luchadora incansable.



Anita es una referente en el campo de las luchas contra las fumigaciones, el uso del glifosato y el 2,4-D, agrotóxicos que desde 2014 comenzaron a dejarle marcas en su cuerpo con una parálisis facial y una insuficiencia respiratoria. Fuente: Naturaleza de Derechos.

En el caso local, si bien el CEPT no ha registrado fumigaciones en las inmediaciones del predio, es una escuela a la que asisten estudiantes y familiares de quienes “manipulan agrotóxicos, o viven cerca de lugares donde se pulveriza, o se ven afectados de distintas maneras” (docente, 8 de septiembre

de 2020). Muchas familias conviven con la maquinaria agrícola (como las cosechadoras o los llamados “mosquitos”³²) o los bidones de distintos agrotóxicos, que frecuentemente son reutilizados para alimentar a los animales o para uso doméstico y abastecimiento de agua a las escuelas. Algunas maestras, al finalizar su jornada escolar, han experimentado un olor muy fuerte que describen como “veneno”. En las adyacencias de las escuelas primarias rurales es común encontrar un pozo de agua donde un fumigador a veces lava sus instrumentos:

[...] empecé a observar en el campo cuando iba de visita a sus hogares por mi trabajo, la verdad que me alarmé mucho porque conviven con la maquinaria a lado de la casa [...] me fui enterando de diversas afecciones en la salud, y yo tenía muy naturalizada esa situación. Ahí comencé a charlar sobre el tema con Ana Zabaloy y otros docentes de la provincia de Buenos Aires. Después ella se fue contactando con otras docentes fumigadas de otras provincias y regiones. A partir de allí, la Red no ha parado de crecer y ya tenemos más presencia (docente, 8 de agosto de 2020).

Aún las cuestiones de salud y ambiente, que constituyen uno de los aspectos centrales en los cuestionamientos de dichas prácticas productivas, son tratadas de manera sesgada. Cualquier cuestionamiento para refutar abiertamente a los agronegocios muchas veces marca tensiones en la arena pública, lo que desata oposiciones cerradas, interpelaciones legislativas y embates mediáticos. Por ejemplo, en el campo ideológico-cultural, el ex ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, dijo que el cáncer que generan los agrotóxicos es una “aseveración ideológica” de las organizaciones sociales. La primera expresión de indignación fue de Nahuel Levaggi, de la Unión de Trabajadores por la Tierra y presidente del Mercado Central de Buenos Aires, quien señaló aspectos dramáticos de la maquinaria institucional y empresarial que rige el rumbo de la Argentina actual.³³

La profundización de los agronegocios ha sido una constante, especialmente durante el gobierno macrista, con el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, la profundización del uso de agrotóxicos, la expansión de monocultivos y la concentración de la tierra. Es un abandono

³² Categoría nativa para referir a la maquinaria que emplea barras de aplicación terrestre para fumigar.

³³ Véase: Los ministros de Monsanto (13 de julio de 2018). *Revista Cítrica*, párr. 3.

total de cualquier intento de regulación y control estatal sobre el uso de agrotóxicos en Argentina. Como mencionamos en líneas anteriores, tras el triunfo del Frente de Todos, en 2019, se volvieron a impulsar políticas públicas para promover la agroecología y la agricultura familiar; pero estas políticas no se proponen como objetivo central ir hacia un cambio de paradigma, sino que continúan favoreciendo a quienes detentan el capital y trabajan en acuerdos públicos-privados para continuar con las “reglas del juego”.

El cuidado de la vida es militancia

*Nuestra postura es clara, estamos en contra de los
agrotóxicos.*

MILITANTE AS (28 de julio de 2019)

*Para frenar esto hay que organizarse y pelear, y lxs
docentes podemos contribuir con ello, enseñando y
aprendiendo desde una mirada ecologista, proble-
matizando en nuestras comunidades y señalando a
lxs responsables políticos.*

Comunicado de la RFDV (6 de julio de 2021)

Las acciones políticas en defensa de los derechos y la vida problematizan el discurso público-privado hegemónico. Estas acciones reconocen las lógicas que condicionan o coartan a los diferentes grupos ciudadanos en los procesos de territorialización, cuestión que ocurre con toda claridad cuando revisamos el rol del Estado capitalista. Las relaciones cotidianas que los grupos subalternizados establecen con ese rol nos lleva a una pregunta que formulara Arturo Escobar: “¿cómo se explica la tenacidad con la que muchas poblaciones y organizaciones locales, no sólo luchan por defender sus territorios; sino que lo hacen a nombre de otra concepción del desarrollo, una relación armónica con la naturaleza y una forma diferente de vida social?” (2014, p. 73).

Es evidente que la territorialidad popular teje la vida social y organiza la acción solidaria, cuestión que puede explicar la propia lucha de los pueblos y organizaciones como AS y la Red Federal de Docentes por la Vida. A su vez, esa territorialidad expresa representaciones colectivas, formas de

intercambio y de producir conocimientos; también la consolidación de redes de trabajo, apoyo mutuo y cuidados; una materialidad, un espacio vivo y afectivo correspondiente a una vida humana y no humana que es irreductible a la lógica financiera (Porto-Gonçalves, 2002). Observamos, en este caso, diversas redes que construyen su territorialización (familiar, vecinal, política). Una territorialización que es también la expresión de malestar de la sociedad (Borde & Torres-Tovar, 2017).

Imagen 8.3 8vo Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires y 1er Encuentro de Agroecología en San Andrés de Giles



El 19 y 20 de agosto de 2017, se realizó el 8vo Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires y el 1er Encuentro de Agroecología en San Andrés de Giles. Los encuentros contaron con la participación de más de 300 personas de distintas localidades y el acompañamiento fraterno de organizaciones de La Pampa, Córdoba y México.

Fuente: *Huerquen, Comunicación en colectivo.*

La acción territorializada de docentes, trabajadores y familias, portadores de una condición político-territorial muy específica, tiene raíces profundas en el proceso de resistencia y lucha político-cultural al modelo agroalimentario actual. Un ejemplo de ello es la asamblea de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires, que nuclea a diversos colectivos y asambleas que desarrollan acciones y prácticas solidarias en distintos territorios de la provincia. Los Pueblos Fumigados se organizan y se encuentran desde hace diez años, alertando a la población y reclamando al Estado que defienda el

derecho a la salud y a la vida. Cada año realizan encuentros donde trabajan “caminos” (ejes temáticos) como “salud, legales, arte y comunicación, ciencia digna, agroecología (experiencias y redes), educación y escuelas rurales”; también retoman los debates generados en los encuentros anteriores e incorporando ejes nuevos en la propuesta: “Somos un movimiento diverso que en muchos territorios desarrolla una gran cantidad de actividades, y es un desafío lograr mayor alcance y visibilidad. Necesitamos ir más allá de los espacios de militancia, llevando el debate al conjunto de la sociedad” (docente y militante AS, 8 de septiembre de 2020).

Estos espacios generan nuevas demandas e intentan ejercer presión a través de denuncias para hacer retroceder a la agroindustria. Por ejemplo, en febrero de 2019, a través de la Resolución 76/19, se suspendió por un año la llamada “Resolución del veneno”. En esta coyuntura, un equipo técnico elaboró un protocolo de aplicación en la zona de amortiguamiento en el marco de las BPA. Actualmente, en el gobierno provincial de Axel Kicillof (Frente de Todos), dicha resolución está suspendida, pero no derogada. El impacto político de esta acción pública por parte de las organizaciones sociales generó que el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires desarrollara un programa a favor del impulso de “producciones agroecológicas”. En marzo de 2021, el ministro Javier Rodríguez presentó, ante actores agroindustriales y empresariales, el Programa BPA-Suelos Bonaerenses, con el que se pretende promover una “producción sustentable”³⁴ basada en el “cuidado” del suelo y la “aplicación responsable” de agrotóxicos, a partir de capacitaciones, certificaciones y estímulos económicos.

Algo importante que este proceso actual abre, entre tantos temas, son las múltiples propuestas que se enmascaran discursivamente como “agroecológicas”. También es una clara apropiación de cierto grupo semántico en las demandas de las organizaciones sociales: “ecología”, “sustentabilidad”, “territorio”. En virtud de estas tensiones en torno a la continuidad de las “reglas del juego”, cobran relevancia las acciones públicas y prácticas solidarias desplegadas por la ciudadanía, como es el caso de los encuentros de Pueblos Fumigados, que se han replicado en los territorios, y cada año suman una diversidad de actores, docentes, familias, productores,

³⁴ Véase: Provincia presentó el programa “Buenas Prácticas Agrícolas” (27 de marzo de 2021). *Infocielo*, párr. 1.

trabajadores, profesionales, técnicos y testigos de las situaciones de injusticia y violencia que los agronegocios desarrollan en los pueblos.

Ante la violencia ejercida “desde arriba” y el persistente incumplimiento de los derechos humanos,³⁵ en el compromiso por la vida de parte de “los de abajo”, la intervención pública se hace colectiva. Consideramos que algunas docencias-comprometidas exponen, como sostenía Antonio Gramsci (1984), vastos elementos organizativos a través de alianzas y estrategias en las formaciones autónomas e independientes ante proyectos políticos extractivistas y las fuerzas sociales en pugna. Las docencias comprometidas con la realidad social, política y territorial que habitan tienen un rol clave hacia dentro de las instituciones y hacia afuera de la comunidad educativa: informando, denunciando, gestionando, generando debates públicos y materiales didácticos con perspectiva ambiental y proponiendo alternativas de producción. Ejemplo de ello son los cursos que ofrecen algunos CEPT de la región en relación con la producción agroecológica.

La territorialidad, en la medida en que combina relaciones inseparables de poder en el espacio, desarrolla funciones materiales y simbólicas (Haesbaert, 2013; Porto-Gonçalves, 2002); es funcional como bien y medio para producir y reproducir distintos procesos vinculados a la convivencia y las necesidades; en la dimensión simbólica es refugio, es un fin en sí mismo (Haesbaert, 2013). Las prácticas y acciones públicas territorializadas expresan, a nuestra consideración, cierta construcción de un proyecto territorial “desde abajo” a partir de las necesidades locales, en tanto ideario de construcción autonómica. Pero no es un ideario autonomista ni liberal, sino una autonomía para trazar límites a los excesos “desde arriba”; para generar hojas de ruta que pongan acento en la vida, y no en los imperativos del extractivismo, la acumulación y el mercado a costa de todo.

En síntesis, las acciones públicas y prácticas solidarias nos muestran la construcción de una identificación colectiva aprehendida relacionamente: cuidar la vida. Ésta se basa en un criterio popular para la generación de una progresiva conciencia social y la defensa de la vida. El cuidado de la vida es, además de luchar por el territorio, es luchar por existir o, como señala Porto-Gonçalves (2013), *r-existir*, y *r-existir* es, máxime, defender el *lugar*, empezando por los propios cuerpos nunca separados del entorno geográfico indispensable para nuestra existencia.

³⁵ A propósito, véase: Aranda, Darío (2018). El ambiente sano es un derecho. *Página 12*.

Reflexiones finales

A lo largo del capítulo, estudiamos las acciones sociopolíticas de grupos ciudadanos atravesados por relaciones y prácticas de poder relacional en los territorios que *habitan*. Describimos las implicaciones que los agronegocios tienen desde hace más de veinte años en Argentina y otros países del cono sur. Nuestra pretensión fue generar un análisis de los factores sociológicos que intervienen en la construcción de una demanda —en tanto práctica solidaria y defensa de la vida— y su repercusión en la arena pública. Son factores que nos sitúan en un campo de relaciones sociales, por lo tanto, nos permiten discutir lo público. Además, siguiendo a Gupta (2015), esta temática nos acerca a dinámicas y formas de reproducir estatalidad y el orden político en su conjunto, en nuestro caso, partiendo de las acciones “desde abajo”.

Realizamos un primer acercamiento a lo que *hay detrás* de una demanda: “paren de fumigar”. Este sintagma, en tanto categoría de la práctica, es la síntesis más clara de la apuesta de los pueblos. El imperativo “paren” evidencia el cese de una práctica en el marco de un modelo productivo amparado por el co-gobierno entre las agencias estatales y los sectores privados. Nos encontramos, además, con trayectorias históricas y gramáticas específicas que muestran cómo el Estado llega a construirse discursivamente en la cultura pública. Paren de fumigar es la muestra de una estructura gramatical de redes solidarias de grupos ciudadanos que articulan un fin simbólico-político. Además, dicho enunciado recupera las voces y acciones de docentes, trabajadores, familias e integrantes de organizaciones sociales que expresan sus luchas y resistencias cotidianas: víctimas de las lógicas agroindustriales que inundan los campos con agrotóxicos, afectando sus modos de vida y trabajo, que precarizan a las personas generando movilidad-desarraigo, desvalorizan la agricultura familiar, los saberes populares y ancestrales; víctimas además de políticas que favorecen estas prácticas y discursos; de un Estado que reprime a quienes protestan y se oponen a las fuerzas que invaden su territorialidad.³⁶

³⁶ Un elemento clave que se desprende de estas expresiones es no romantizar o idealizar a los grupos ciudadanos en defensa de sus territorios. La resistencia y la lucha son un proceso muy difícil y violento, que evoca día a día a las personas. Además, romantizar sus acciones conlleva invisibilizar sus dimensiones y disposiciones ideológicas, tomas de decisiones y tensiones internas.

Es clara la manera en que las relaciones sociales entre estos actores y sus horizontes de sentido se anudan, tensionan y transforman en el desarrollo de un curso de acción pública y práctica territorial; lo cual implica una heterogeneidad de escenarios y conflictos que operan y, en un momento dado, producen un resultado a menudo parcial y provisorio en las tomas de decisiones ante las problemáticas territoriales. Ahora bien, reconocemos que este tipo de análisis corre el riesgo de generalizar sobre procesos que llevan en sí mismos su propia diferenciación y especificidad, en especial cuando algunos actores sociales (el empresariado agrario, en este caso) instrumentalizan a las agencias estatales para realizar sus objetivos. En el mismo plano, la arena estatal se convierte en un espacio de traducción de intereses económicos y sociales diversos que logran articularse en torno a demandas, programas o resoluciones concretas.

El contexto de tensiones evidencia que la acción pública genera cualidades específicas y explica posturas diversas³⁷ en las demandas y el sentido que le asignan los actores en función de sus posiciones, pero también nos muestra a las instituciones, las normas y los procedimientos que gobiernan el conjunto de las representaciones colectivas territorializadas. Estas acciones públicas nos permitieron acercarnos al estudio de las esferas Estado-empresariales, lugar donde lo que está en juego es el poder relacional de regular un campo de prácticas (producción agropecuaria, sistemas agroalimentarios, ambiente, salud, educación) y recursos (jurídicos, administrativos, financieros). Dicho campo nos muestra que muchas veces las políticas públicas *no tienen* “público” al estar influenciadas por grupos sociales hegemónicos que protegen sus intereses.

Intentamos visibilizar cómo algunas demandas sociales hacen que un “conflicto” se transforme en un campo de co-construcciones que influya en la agenda pública (entendida como espacio de regulación política de asuntos colectivos). Evitando la dicotomía tradicional de las relaciones gobernantes-gobernados, reconocemos que esta agenda es atravesada por las relaciones entre el “poder público” y los “destinatarios”, pero sobre todo por los grupos de presión de los agronegocios que emergen a raíz del “consenso extractivista”, manifestando claras continuidades en los diversos mandatos

³⁷ Agradecemos a la querida profesora María Rosa Neufeld por plantear este importante asunto en un ensayo no publicado elaborado por uno de los autores, en el seminario *Investigaciones Socioantropológicas en América Latina* (Universidad Nacional de Córdoba, 2019). El texto mencionado aportó algunos planteamientos para la construcción de este capítulo.

gubernamentales que se sucedieron en el poder en las últimas dos décadas. Así, en el proceso se imponen límites a la participación social en contextos determinados, marcando la política del agro argentino.

Las acciones solidarias insisten en que “otra alternativa es posible”. En función de ello, proponen ordenanzas y legislaciones para limitar, pero sobre todo erradicar, las fumigaciones con agrotóxicos. Eso se hace territorializando la educación ambiental como signifiicante de “concientización social” en pos de la transformación social de los pueblos que conviven con actividades extractivistas; configurándose, de este modo, la generación de otras formas de economía y sociedad. Tales acciones no se limitan a la denuncia de esas prácticas, sino que promueven el desarrollo de políticas solidarias que realmente impulsen la construcción de procesos agroecológicos a mayor escala. Así, la vasta trama de organizaciones y experiencias populares que ven luz en la movilizad Argentina de hoy promueven una soberanía alimentaria basada en una reforma agraria verdadera, que promueva el arraigo de las familias en el campo, genere una posición respecto a las relaciones humano-ambientales y produzca alimentos sanos para los mercados locales.

Nuestro acercamiento a las territorialidades que trazan las esferas público-privado-civil permitió aproximarnos a la producción de formas de agenciamientos políticos. En este sentido, es importante visibilizar los conflictos, las negociaciones y las tensiones que se producen en los territorios. Sin embargo, sigue pendiente una tarea más profunda sobre la interseccionalidad (género, clase, grupo, etnia) que caracteriza a las prácticas políticas de los grupos ciudadanos ante los gobiernos y sus “representantes”. De ahí la necesidad de estudiar sistemáticamente las acciones *desde abajo*, sobre todo cuando algunas organizaciones sociales marcan un horizonte político a partir de propuestas y estrategias de educación ambiental integral y de soberanía alimentaria, no sólo como política agraria, alimentaria y ambiental, sino como herramienta de lucha, identificación, derechos, memoria, territorialidad popular y reivindicación de las condiciones de vida.

Referencias

Bageneta, J. M. (2015). *Del algodón a la soja. Territorio, actores y cooperativas en el Gran Chaco Argentino (1960-2010)*. Buenos Aires: Intercoop.

- Borde, E. & Torres-Tovar, M. (2017). El territorio como categoría fundamental para el campo de la salud pública. *Saúde em Debate*, 41, 264-275. Recuperado de <https://doi.org/10.1590/0103-11042017s222>
- Córdoba, M. S. (2019). *La solidaridad en tiempos del agronegocio*. San Martín: UNSAM Edita.
- Delgado, G. C. (2013). Economia do agronegócio (anos 2000) como pacto do poder com os donos da terra. *Revista Reforma Agrária*, 61-68.
- Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín: Unaula.
- Giarracca, N. (2002). Movimientos sociales y protestas en los mundos rurales latinoamericanos: nuevos escenarios y nuevos enfoques. *Sociologías*, (8), 246-274. Recuperado de <https://doi.org/10.1590/S1517-45222002000200011>
- González Maraschio, F. (2011). *Nuevas dinámicas rurales. Transformaciones socio-productivas recientes y usos del territorio en el partido de San Andrés de Giles (PBA)*. Tesis de Maestría. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires.
- Gramsci, A. (1984). *Los intelectuales y la organización de la cultura*. Buenos Aires: Edicol.
- Gras, C. & Hernández, V. (2013). Los pilares del modelo agribusiness y sus estilos empresariales. En C. Gras & V. Hernández (Eds.), *El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización* (pp. 17-46). Buenos Aires: Biblos.
- Gupta, A. (2015). Fronteras borrosas. El discurso de la corrupción, la cultura de la política y el Estado imaginado. En *Antropología del Estado* (pp. 71-144). México: FCE.
- Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y Representaciones Sociales*, 8(15), 9-42.
- Haesbaert, R. (2014). *Viver no limite: Território e multi/trans territorialidade em tempos de in-segurança e contenção*. Río de Janeiro: Bertrand.
- Haesbaert, R. (2021). A corporificação "natural" do território: Do terricídio à multiterritorialidade da terra. *GEOgraphia*, 23(50). Recuperado de <https://doi.org/10.22409/GEOgraphia2021.v23i50.a48960>
- Hendel, V. (2009). Sociedad, naturaleza y nuevas tecnologías. La problemática del monocultivo de soja en el Partido de San Andrés de Giles. *Theomai. Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo*, (20), 5.
- Maldonado, A. (2016). La influencia de los agrotóxicos en el metabolismo social con la naturaleza. En D. Verzeñassi (Ed.), *Re-cordar, un ejercicio*

- saludable. *Memorias del 1er Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental* (pp. 48-67). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: El Colectivo.
- Pálsson, G. (2001). Relaciones humano-ambientales. Orientalismo, paternalismo y comunalismo. En P. Descola & G. Pálsson (Eds.), *Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas* (pp. 80-100). México: Siglo XXI.
- Porto-Gonçalves, C. W. (2002). *Da geografia às geo-grafias. Um mundo em busca de novas territorialidades*. Xalapa: Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales.
- Porto-Gonçalves, C. W. (2013). La reinención de los territorios: la experiencia latinoamericana y caribeña. En *Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina*. Lima: Unión Geográfica Internacional Perú.
- Ricca, C., Dubois, D. & Lara Corro, E. S. (2019). Escuelas fumigadas. Ganancias a corto plazo vs derechos de la niñez y juventud. *III Congreso Latinoamericano de Teoría Social*, presentado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Scott, J. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. México: Era.
- Trouillot, M. (2001). The Anthropology of the State in the Age of Globalization: Close Encounters of the Deceptive Kind. *Current Anthropology*, 42(1), 125-138. Recuperado de <https://doi.org/10.1086/318437>
- Villulla, J. M. (2015). *Las cosechas son ajenas. Historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio*. Buenos Aires: Cienflores.
- Vittori, S., Barbieri, S., Peluso, L. & Marino, D. (2017). Escuelas rurales como escenarios de exposición directa a agrotóxicos: estudio en aire ambiente. Presentado en el *IV Congreso Internacional de Salud Socioambiental*, Rosario, Argentina, del 12 al 16 de junio de 2017.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MÉXICO.
BIBLIOTECA FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO

[LC] LC 1099.A5 T45.2022

[Dewey] 370.196 T45.2022

Tejiendo diálogos y tramas desde el Sur-Sur: territorio, participación e interculturalidad / Stefano Claudio Sartorello, Ana Carolina Hecht, José Luis García, Erik Said Lara Corro (coordinadores); [autores] Luis Enrique López, Julieta Briseño-Roa, Diana Yaneth Ávila ... [et al.]. – México: Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 2022 – Publicación electrónica. – ISBN: 978-607-417-879-1

1. Educación multicultural – América Latina – Congresos. 2. Pluralismo cultural – América Latina – Congresos. 3. Comunicación intercultural – América Latina – Congresos. 4. Territorialidad humana – América Latina – Congresos. 5. Mujeres indígenas – Educación – América Latina – Congresos. I. Sartorello, Stefano Claudio. II. Hecht, Ana Carolina. III. García, José Luis. IV. Lara Corro, Erik Said. V. López Hurtado, Luis Enrique. VI. Briseño-Roa, Julieta. VII. Ávila Camargo, Diana Yaneth. VIII. Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. IX. Encuentro Interinstitucional: Territorio, participación e interculturalidad. Miradas críticas desde el Sur-Sur (2º: 2020: México, Bolivia, Argentina)

D.R. © 2022 Universidad Iberoamericana, A. C.
Prol. Paseo de la Reforma 880
Col. Lomas de Santa Fe
Ciudad de México
01219
publica@ibero.mx

Primera edición: junio 2022
ISBN: 978-607-417-879-1

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización del editor. El infractor se hará acreedor a las sanciones establecidas en las leyes sobre la materia. Si desea reproducir contenido de la presente obra, escriba a: publica@ibero.mx

Hecho en México

Este libro busca captar algunas de las dimensiones claves de la profunda heterogeneidad presente en una sociedad compleja como Abya-Yala. A partir de ejes como el territorial, la cuestión indígena, los procesos migratorios, así como las diferencias lingüísticas y de género, se recorren experiencias procedentes de diferentes latitudes de América Latina pensadas desde un Sur-Sur geopolítico y epistémico que teje los diálogos y las tramas de la obra. Invitamos a leer, disfrutar, reflexionar y criticar las aportaciones que, desde esta perspectiva, realizan las y los autores que en ella participan.

